

Sra. D^a Yolanda Diaz Perez

Ministra de Trabajo
P^o de la Castellana, 63
28071 Madrid

Madrid, 6 de abril de 2020.

SOBRE LA CONTRATACIÓN DE MENORES -O MAYORES- EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

Estimada ministra:

El objeto de esta carta es la de proponer nuevas medidas extraordinarias y temporales para facilitar la contratación de trabajadores para las tareas agrarias, necesarias para poder seguir manteniendo el abastecimiento alimentario a la población en las próximas semanas. Por ello, traslado la siguiente propuesta:

1.Efectivamente, la Secretaría de Estado de Migraciones de este Gobierno ha permitido, con carácter general, que los menores no acompañados puedan acceder al mercado de trabajo a los 16 años en las mismas condiciones que el resto de menores. En este sentido, la concesión de la autorización de residencia, expedida a favor de los menores extranjeros, habilita para el ejercicio de la actividad laboral por cuenta ajena en el momento en que éstos alcancen los 16 años de edad, sin que sea necesario otro trámite administrativo en materia de extranjería. Constará en la documentación que el menor se halla "habilitado" para trabajador por cuenta ajena, cumpliendo así la normativa de extranjería que permite a los menores extranjeros en edad laboral tutelados por un servicio de protección de menores competente, no necesitar seguir el procedimiento ordinario para obtener la autorización de trabajo para aquellas actividades que, a propuesta de la mencionada entidad, mientras permanezcan en esa situación, favorezcan su integración social. Lógicamente, todo ello exigirá respetar lo que establece el artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores en relación al trabajo de los menores (nada de trabajos nocturnos, ni horas extras, ni actividades o puestos en los que existan límites a la contratación por razones de salud laboral).

2.Por lo demás, y aun cuando con carácter general ya se admita este trabajo de los menores, la mayor parte de las Comunidades Autónomas han mantenido la inserción laboral de estos menores extranjeros no acompañados a través de programas propios de empleo dentro de sus competencias en esta materia.

3. El problema surge, ciertamente, con aquellos menores que cumplen la mayoría de edad y que tienen que someterse, éstos sí, a las reglas generales de

contratación para extranjeros. En ese caso, y dependiendo de cuánto tiempo lleve el menor en España y de la situación en la que se encuentre, efectivamente, la duración del contrato laboral puede oscilar entre seis y doce meses -seis meses, por ejemplo, por arraigo laboral, esto es, aquellos que llevan dos años en España y pueden acreditar una relación laboral, al menos, de seis meses.

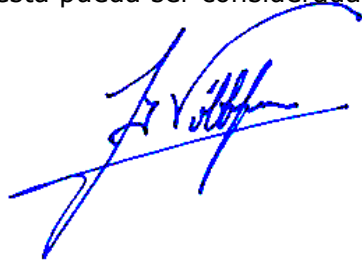
4. Pero son muchos los menores, ahora mayores, que, protegidos y amparados por una función de tutela del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente, incluso para desarrollar un trabajo, dejan de tener protección, tutela y trabajo cuando cumplen la mayoría de edad. Sin embargo, cualquier modificación en materia de extranjería sería técnicamente compleja puesto que la mayor parte de derechos y obligaciones se contienen en una ley orgánica.

5. En este sentido, las posibilidades aparentan ser más limitadas y no exentas de dificultad técnica, jurídica y política. Con todo, cabría plantear las siguientes opciones: a) la ampliación de la cobertura, dentro del ámbito de los programas de empleo e inserción social autonómico, a estos mayores, prolongando incluso su tutela por encima de la mayoría de edad; de esta forma, el mantenimiento del tutelaje permitiría seguir la actividad laboral excepcional y temporal de prestación de servicios en el ámbito agrario dada esta situación coyuntural; b) la intervención en la autorización excepcional para trabajar en estas condiciones de los centros de tutela, evitando así que, por el hecho de la mayoría de edad, se pueda plantear una "explotación" laboral de estos trabajadores, con déficit de sus derechos laborales; c) en este punto, y salvadas todas las distancias que diferencian ambas situaciones, podría generarse una protección semejante a la que los centros especiales de empleo ofrecen a las personas discapacitadas que ponen a disposición de enclaves laborales, cubriendo así toda la protección de las personas más vulnerables, como pueden ser estos extranjeros, ex menores. Con todo, la objeción sobre la autorización de trabajo no deja de ser un hándicap que sólo con una excepción administrativa al procedimiento de concesión basada en circunstancias excepcionales (como algunas normas legales han realizado a la estancia o al trabajo de los extranjeros por razones humanitarias, autorización temporal para campañas en el marco de prestaciones transnacionales, etc.), podría admitirse.

6. Para evitar objeciones a este planteamiento o a cualquier otro que pudiera permitir la inclusión de estos menores o ex menores en la prestación de servicios en el campo, cabría aludir, entre otras, a dos normas principalmente. Por una parte, a la Ley 26/2015, de 28 de julio, BOE, 29 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia por la que se modificaron e incorporaron, entre otras disposiciones, los artículos 11.4 y 22 bis de la LO 1/1996, de 15 de enero, BOE, 16 de Protección Jurídica del Menor, que vinieron a garantizar la protección de aquellos jóvenes que han estado sujetos al régimen de protección una vez éstos han alcanzado la mayoría de edad. En el artículo 11.4 se establece cómo *"las Entidades Públicas dispondrán de programas y recursos destinados al apoyo y orientación de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayoría de edad y queden fuera del sistema de protección, con especial atención a los que presentan discapacidad. Y, por su parte, el artículo 22 bis señala que "las Entidades Públicas ofrecerán programas de preparación para la vida independiente dirigidos a los jóvenes que estén bajo una medida de protección, particularmente en*

acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de su mayoría de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso de participación activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas deberán propiciar seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas. Y, por otro lado, al artículo art. 35.9 de la Ley Orgánica de Extranjería (LO 4/2000, de 11 de enero, BOE, 12), que recoge un mandato en virtud del cual "las Comunidades Autónomas desarrollarán las políticas necesarias para posibilitar la inserción de los menores en el mercado laboral cuando alcancen la mayoría de edad", siempre y cuando cuenten con la autorización de residencia y con la autorización de trabajo para el desempeño de una actividad laboral, aunque en ocasiones pueden realizar determinadas actividades sin haber obtenido la autorización de trabajo.

Esperando que esta propuesta pueda ser considerada, reciba un cordial saludo.



Fdo: Ángel Villafranca
Presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias de España